

¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas?

Por Alejandro J. Rodríguez Morales

Actualmente en Venezuela ha tomado nuevamente vigor la discusión acerca de la posibilidad de hacer responder penalmente a las personas jurídicas, esto quiere decir, de sostener la responsabilidad penal de empresas o corporaciones, lo que tiene importantes consecuencias prácticas. El detonante de este renovado interés generalizado por el tema ha sido una sentencia sobre el mismo dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de junio de 2009 y, más recientemente, la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público en contra de la empresa conocida como Globovisión.

Ante tales hechos concretos que se han manifestado en el momento presente cabe plantearse una pregunta que desde hace mucho tiempo ha venido siendo analizada por la dogmática penal, a saber, ¿tienen responsabilidad penal las personas jurídicas? Esta problemática, como es obvio, amerita un estudio que ciertamente excede el propósito y el marco de estas breves líneas (para lo que puede hacerse remisión a lo expuesto en RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro J. *Síntesis de Derecho Penal. Parte General*. Ediciones Paredes. Caracas, Venezuela. 2006); por lo que aquí únicamente se esbozarán algunas cuestiones generales que se considera importante resaltar a la luz de lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, procurando dar una conclusión que permita fijar posición en relación a si efectivamente puede hacerse penalmente responsable a una persona jurídica de manera directa, como parece reflejar tanto la decisión judicial ya referida, como el propio hecho de que se haya abierto una investigación penal contra una persona jurídica en específico.

En este sentido, lo primero que resulta conveniente señalar es que ciertamente el Derecho penal ha sido concebido y construido desde sus orígenes bajo la premisa de que sólo las personas naturales o individuales pueden considerarse sujetos activos de delito, no por casualidad, sino porque efectivamente en realidad ello ocurre de esa manera. Por ese motivo los delitos tradicionales, por darles una denominación, únicamente pueden ser cometidos por personas naturales y no es en lo absoluto posible que pueda perpetrarlos un ente abstracto o con mera personalidad jurídica como son las empresas o compañías; así, y de manera paradigmática, el delito de violación o el delito de robo.

Lo anterior no obsta, es verdad, que el Derecho penal puede reformular sus visiones tradicionales o recurrentemente aceptadas en cuanto a que ha sido pensado a la luz de la persona natural como protagonista del hecho punible, sin embargo el que ello haya sido de esa manera no deja de ser un indicativo importante de que por algo se concibió de ese modo y no incluyendo a las personas jurídicas como eventuales sujetos activos de delito.

Más allá de ello, tiene que indicarse que las personas jurídicas, a diferencia de las personas naturales o físicas, carecen de entidad real o material, ostentando tan sólo una personalidad ficticia que les es conferida por la ley, y por ello se habla de que se trata de una “ficción jurídica”, lo que impide que, incluso para quienes son partidarios de sostener la responsabilidad penal de empresas o corporaciones, las mismas puedan cometer una serie de delitos que implican precisamente la existencia de una entidad real o material (además de la violación y el robo, puede pensarse también en el adulterio, el incesto, el rapto y la

bigamia), menos aún que puedan perpetrar algunas faltas como la embriaguez (!). Obviamente decir que una empresa violó a una mujer o que se encontraba en estado de ebriedad sólo puede generar no menos que jocosidad.

Adicionalmente a ello, y en directa conexión con lo anterior, tiene que recordarse asimismo que por ser entes abstractos sin entidad material, son los representantes de la persona jurídica quienes actúan por ella, de modo que, en realidad, una empresa sólo “actúa” ante la ley por la ficción existente que se los permite, pero se sabe que son sus directivos, representantes, accionistas o empleados quienes verdaderamente están actuando en el marco de ese ente jurídico abstracto que es la corporación o compañía. Tan es así lo antedicho que en otras disciplinas jurídicas diversas a la penal, como es el caso del Derecho financiero o tributario, así como en el Derecho mercantil, se habla en la actualidad de la necesidad de “levantar” el velo jurídico de las empresas, con lo que se busca hacer responsables a los accionistas por actuaciones abusivas realizadas al amparo de la autonomía patrimonial de las sociedades mercantiles.

En cuanto esto, entonces, no parece de recibo que el Derecho penal, a diferencia de otros sectores del Derecho, se empeñe en responsabilizar directamente a la persona jurídica a pesar de que es la actuación de los directivos, representantes o accionistas la que en definitiva se traduce en un hecho lesivo de bienes jurídicos penalmente tutelados.

En tal virtud, el castigo de la empresa, en vez de la imposición de una pena a las personas naturales que hacen vida dentro de aquélla, lo que puede suponer en todo caso, desde un punto de vista político-criminal, es que los hechos delictivos se sigan perpetrando, si no en la propia empresa (porque por ejemplo se imponga una pena de disolución de la persona jurídica), en otra que pueda ser creada posteriormente a esos efectos, y nótese la facilidad que existe en el ordenamiento jurídico para crear y registrar sociedades mercantiles.

Por si lo dicho fuera poco, al carecer las personas jurídicas de entidad real o material (valga decir, de corporeidad física), no pueden ser objeto de la principal sanción que impone el Derecho penal, a saber, la pena privativa de libertad (la prisión), pues mal se podría “encarcelar” a una empresa. De esta manera, habría que pensar en penas que sí resultasen aplicables a las personas jurídicas por concebirse a esos fines, como la precitada disolución.

No obstante, el vigente Código Penal venezolano no establece penas concebidas para su imposición a personas jurídicas, y es por ello que la mayoría de los delitos se encuentran amenazados con penas de prisión. A ese respecto, debe resaltarse que el principio de legalidad (conocido con la frase latina “*nullum crimen, nulla poena sine lege*”), entraña, además de una garantía criminal (por la que el “crimen” sólo puede castigarse si está descrito en la ley), también una garantía penal (en virtud de la cual sólo pueden imponerse aquellas “penas” que estén descritas en la ley y asignadas al delito de que se trate en cada caso).

Siendo esto así, aunque el Tribunal Supremo de Justicia asome la posibilidad de admitir una responsabilidad penal de las personas jurídicas y haga lo propio el Ministerio

Público al abrir una investigación penal contra Globovisión, es obvio que se vulneraría flagrantemente el principio de legalidad si se impusiera a esa empresa una pena distinta a la de prisión (que fácticamente no podría aplicarse), consagrada para casi todos los delitos, en tanto la misma sería inexistente en el ordenamiento jurídico patrio, concebido, se reitera, en base a la persona natural o física como protagonista del hecho delictivo.

Sumado a esto, y tomando nuevamente en cuenta la importante perspectiva político-criminal, debe anotarse que existen una serie de sanciones no penales que sí pueden imponerse a las personas jurídicas, puesto que pertenecen a sectores del Derecho en los que siempre han sido éstas sujetos relevantes, como sucede en el ámbito del Derecho mercantil así como del Derecho administrativo, siendo, por su parte, castigos mucho más eficaces para contrarrestar las “actuaciones” de personas jurídicas que en un momento dado puedan considerarse lesivas y violatorias de esas legislaciones. Por lo demás, simplemente responsabilizar penalmente a una persona jurídica por un cierto hecho cuando en realidad hay alguien o algunos “detrás” de ello, lo que puede evidenciar es la impunidad que se estaría generando frente a tales sujetos, que, se insiste, son los que realmente tendrían que ser sancionados de la mano del Derecho penal de comprobarse su autoría o participación en hechos delictivos, así sea al amparo o bajo el velo de una persona jurídica cualquiera.

Probablemente el desconocimiento de esas sanciones no penales y de la responsabilidad penal de los directivos, accionistas, representantes o empleados de la persona jurídica según los casos, haga pensar a algunos que ésta debe tener una responsabilidad penal directa, cuando ello resulta ineficaz, desproporcionado, inficioso y contraproducente, además de contrariar los pilares sobre los que, al menos hasta el momento, se encuentra sustentado el Derecho penal venezolano, en el cual sigue teniendo vigencia el brocardo “*societas delinquere non potest*” (las sociedades no pueden delinquir), quienes delinquen son las personas naturales que actúan dentro de la persona jurídica, mas no ésta directamente. Debe tenerse claridad a ese respecto y de esa forma castigar a los responsables por los hechos delictivos que se han cometido al amparo de la empresa Globovisión si ello es el caso; no, en cambio, pensar en una inaceptable responsabilidad penal de dicha persona jurídica, cuyo rechazo se ha procurado fundamentar en estas breves líneas.

